

14 | Conversación | La Segunda viernes 17 abril 2026

Martín Romero E.

En una columna en este diario, pocos días antes de que José Antonio Kast asumiera la Presidencia, Ricardo González apuntaba que la principal fortaleza del nuevo Gobierno era haber captado la creciente demanda de orden existente. A un mes de la instalación, este ingeniero comercial y magíster en Economía, sigue pensando lo mismo pero con un matiz: tras el alza de las bencinas, y sin un esfuerzo para compensarlas, ese activo puede erosionarse con rapidez.

“A diferencia de Argentina, en Chile existe una expectativa más fuerte de estabilización y protección frente a *shocks*. Esta medida (el alza) desentona con el capital político de orden y protección con que Kast llegó a La Moneda”, dice el director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social (LEAS) de la U. Adolfo Ibáñez, y ex-coordinador del Área de Opinión Pública del CEP.

Todo se juega, agrega González, no sólo en demostrar resultados concretos —tanto en el reestablecimiento del orden público como en la carestía de la vida— sino también en construir una narrativa que sea verosímil ante la ciudadanía.

“La promesa de orden genera expectativas muy altas”

—Parece que al Presidente Kast, como a casi ninguno de sus antecesores, le importan poco las encuestas, o al menos a la hora de tomar decisiones políticas drásticas como el alza de los combustibles.

—No diría que no le importan las encuestas. Señalaría más bien que, en este caso, optó por subordinar ese cálculo a otro: el de afirmar un principio de responsabilidad fiscal, aunque tuviera un costo en su aprobación. El problema es que una cosa es asumir un costo transitorio y otra es hacerlo sin un relato de protección que le haga sentido a la ciudadanía. Ahí está la diferencia. El contraste de la situación actual con la crisis financiera global de 2009 es interesante porque muestra que, ante una crisis externa, la ciudadanía no solo evalúa la magnitud del shock, sino también si siente que el Estado la protege. Michelle Bachelet y Andrés Velasco lograron convertir la regla contracíclica en una narrativa de protección social, y eso coincidió con un alza histórica en la aprobación presidencial y confianza en las instituciones. De hecho, el 2009 fue el año de mayor confianza institucional en este siglo, según las encuestas CEP. En el caso del alza de los combustibles de este año, el Gobierno de Kast optó por un relato de estrechez fiscal y sinceramiento de costos que recuerda, en parte, el estilo de Javier Milei en Argentina. Ese encuadre puede ser defendible técnicamente en el contexto fiscal chileno, pero políticamente transmite mucho menos alivio.

—En marzo hablabas de que el orden es el principal capital político del



Ricardo González:

“Kast necesita mostrar resultados y construir una narrativa de protección convincente”

El director del Laboratorio de Encuestas y Análisis Social de la UAI dice que “si el Gobierno quiere recuperar apoyo no le bastará con la disciplina fiscal”.

Gobierno.
 —Sí, sigo creyendo que el orden es su principal capital político. Pero se trata de un capital condicional porque sirve mientras logre traducirse en resultados visibles o, al menos, en una sensación de mayor control. Cuando un Gobierno llega al poder montado sobre la promesa de orden, no puede permitirse que la ciudadanía perciba persistencia del desborde, porque en ese mismo instante ese capital empieza a volverse en su contra.
 —El Presidente dijo que en “un año van a agradecer la responsabilidad que hemos tenido como Gobierno”. La

apuesta parece clara: recuperar más temprano que tarde la evaluación positiva que tuvo al llegar al Ejecutivo. ¿Eso es posible?
 —Recuperar apoyo es posible, pero no de cualquier manera. El caso de Bachelet en 2009 es ilustrativo. En 2008 su aprobación no era alta, en buena medida por la puesta en marcha del Transantiago el año anterior. Después de enfrentar la crisis financiera global con su red de protección social, su aprobación presidencial llegó a 78%, junto con altos niveles de evaluación positiva del manejo económico. Esto evidencia que la opinión pública pre-

mia a un Gobierno cuando logra proyectar competencia y protección.

—¿Qué tendría que hacer Kast entonces?

—Si el Gobierno de Kast quiere recuperar apoyo, no le basta con la disciplina fiscal ni decir “después nos van a dar la razón”; necesita mostrar resultados, y además, construir una narrativa de protección convincente. Así como el Gobierno ha hablado de un escudo fronterizo, necesita también de un escudo social: una forma visible de proteger a la población frente a shocks que afectan la vida cotidiana como el alza de los combustibles. Veo medidas en esa dirección, pero no un relato en esa línea que haya permeado a la opinión pública hoy.

—Te lo preguntaba porque en un primer balance de este mes, la seguridad ha sido una de las asignaturas pendientes: la semana pasada hubo 21 homicidios.

—Cuando el orden se convierte en el principal activo político, también se convierte en la prueba más exigente del Gobierno. La promesa de orden genera expectativas muy altas, que son difíciles de administrar porque los problemas de seguridad no se corrigen de un día para otro. Por eso, el riesgo es alto: si la percepción de inseguridad persiste, el capital político asociado al orden puede erosionarse con rapidez, incluso aunque el Ejecutivo siga siendo creíble en otras áreas.

—¿Crees que la gente mirará con malos ojos la rebaja al impuesto corporativo que pagan las empresas en un contexto de alza de las bencinas? Digo, el discurso ese que levanta la oposición de que el Gobierno “beneficia a los ricos”. Hablando con algunos encuestadores, señalan que “hay terreno fértil” para que esa mirada prospere.

—Sí, creo que hay terreno fértil porque el episodio de los combustibles dejó al Gobierno expuesto en el plano redistributivo. Cuando frente al “bencinazo” el mensaje es “no podemos amortiguar más”, y luego aparece una rebaja al impuesto corporativo —como la anunciada en la cadena nacional dentro del plan económico— le entrega a la oposición una base narrativa clara para instalar la idea de que a este Gobierno no le importa la desigualdad de ingresos. Eso no significa que esa lectura ya esté consolidada, pero sí que el Ejecutivo necesita explicar muy bien por qué la rebaja favorece al país y no solo a los sectores acomodados. Si no lo hace, el contraste se vuelve políticamente muy costoso para el Gobierno.

“Puede haber movilización social”

—¿Crees que el Gobierno tiene un relato ordenado? El concepto de “gobierno de emergencia” ayudó en la campaña, pero hoy parece languidecer.

—Por ahora, no veo un relato ordenado. La cadena nacional reciente apunta a construir uno, pero todavía está por verse si es creíble para la ciudadanía. En cam-

paña, “emergencia” y “orden” servían porque condensaban muy bien el malestar del momento. Gobernar es más difícil: exige transformar esa consigna en una secuencia creíble de prioridades, costos, plazos y beneficios. Mi impresión es que Kast y su equipo han tenido más claridad en el diagnóstico que en el relato. Han dicho que hay que ordenar, sincerar y reactivar, pero no han logrado todavía articular todo eso en una narrativa sencilla de protección y esperanza a la ciudadanía. Y en opinión pública eso importa mucho.

—Hay un clima más “derechizado”, ¿no? Si uno mira la Cadem, un 75% apoya que estudiantes que participen en hechos violentos no puedan acceder a gratuidad.

—Yo tendría cuidado con hablar de una derechización ideológica profunda. Lo que veo con más claridad es una intensificación de la demanda por orden, control y autoridad. Eso favorece a la derecha, por supuesto, pero no necesariamente porque Chile se haya vuelto más doctrinariamente de derecha, sino como una reacción práctica frente a la inseguridad, al estancamiento económico y a una sensación de desborde, muy evidente tanto en algunos liceos como también en materia migratoria.

—¿Se puede dar una movilización social? Hace un tiempo dijiste que “ese ánimo seguía estando ahí”.

—Creo que sí puede haber movilización social, pero no necesariamente en la escala de lo que ocurrió en 2019. Hay evidencia de que factores como el signo ideológico del Gobierno influyen —por ejemplo, los gobiernos de derecha tienden a enfrentar más protesta que los de izquierda en Chile— y también sabemos de la investigación académica que, en ciertos grupos, aumenta la legitimación de la violencia para conseguir fines políticos ante episodios de represión policial. Pero eso no es suficiente para reproducir un ciclo como el de 2019. Hoy el contexto es distinto: políticamente hablando, hay más fatiga tras los dos procesos constitucionales, más fragmentación, y sobre todo, un electorado más pragmático y menos ideologizado tras el retorno del voto obligatorio. Además, quienes lideraron ese proceso luego fueron Gobierno, sin respaldo mayoritario en las urnas en 2025, lo que debilita su capacidad de volver a conducir una movilización de esa magnitud. Más que un nuevo estallido, se podrían esperar episodios de protesta más acotados, menos masivos y con menos conducción política que en 2019.

—¿La oposición puede capitalizar la baja en el apoyo a Kast?

—No necesariamente en el corto plazo. Hoy existe un electorado más distante, menos ideológico y más desconfiado, que no se mueve linealmente hacia la oposición tradicional cuando castiga al Gobierno. Más bien, evalúa quién le ofrece mayor capacidad creíble para enfrentar problemas muy concretos: seguridad, economía, migración. Eso no se logra con una simple

crítica a quienes ejercen el poder hoy. Además, el escenario es aún más complejo para la oposición, ya que todavía no aparecieron liderazgos claros y sigue pesando la experiencia reciente de un Gobierno que no logró proyectar esa capacidad para enfrentar problemas ante la ciudadanía.

—¿Hay demasiadas encuestas políticas dando vueltas? Existen al menos ocho muestras periódicas, y eso sin contar los sondeos más espaciados como la CEP.

—No creo que el problema sea la cantidad. En una democracia, la circulación de información y de encuestas no es un problema en sí. El punto es otro: si van a haber muchas, tienen que estar bien hechas y ser transparentes. Ahí radica el problema. Por ejemplo, varias encuestadoras no reportan con suficiente claridad cómo construyen sus paneles u obtienen sus muestras. También importa qué y cómo se pregunta. Entre elecciones, eso es clave para entender la opinión pública, y ahí también hay bastante heterogeneidad: son frecuentes las preguntas ambiguas, cargadas o poco informativas. Por esa razón, más encuestas no necesariamente significan más claridad. En este contexto, la demanda por interpretarlas —por saber qué se está midiendo realmente, qué comparaciones son válidas y cuánto de un movimiento es sustantivo o solo ruido— crece.

—¿Por qué hay resultados disímiles en algunas encuestas? Cadem señaló que la baja en la aprobación del Gobierno ha sido marginal (un punto), mientras que otras (Criteria) han mostrado una caída mucho más pronunciada (seis puntos).

—Hay diferencias por varias razones. Primero, porque no todas las encuestas están mirando exactamente al mismo electorado. Las encuestas más visibles en el debate público tienden a utilizar paneles integrados por personas más interesadas en política, más informadas y con preferencias más estables. En cambio, el electorado más distante, desconfiado y de decisión más tardía —que con voto obligatorio también pesa— queda peor representado. Segundo, porque existen diferencias en reclutamiento, ponderación, formulación de preguntas y fechas de campo que pueden producir resultados distintos, aunque todas estén midiendo un mismo fenómeno. Y tercero, porque en Chile todavía hay demasiadas cajas negras metodológicas: muchas veces no se reporta con suficiente claridad cómo se reclutaron los participantes, qué tasa de respuesta tuvo el estudio o quién lo financió. Entonces, más que decir que todas son malas o buenas, yo diría que la calidad es variable. El ejemplo de 2025 es claro: en primera vuelta varias encuestas no lograron captar bien al electorado que se decidió más tarde —tanto por problemas de muestra como por las preguntas que usaron— y eso contribuyó a subestimar la votación de Franco Parisi. En segunda vuelta, en cambio, se acercaron mucho más al resultado oficial.



El Gobierno necesita explicar muy bien por qué la rebaja favorece al país y no solo a los sectores acomodados. Si no lo hace, el contraste se vuelve políticamente muy costoso”.



Son frecuentes las preguntas ambiguas, cargadas o poco informativas en las encuestas. Por esa razón, más encuestas no necesariamente significan más claridad”.